

EL retraso de cuatro días en la celebración del Consejo de Ministros. La incorporación de algunas de las medidas allí aprobadas. El editorial del "Wall Street Journal". Las negativas reacciones de las centrales sindicales y de algunos partidos de oposición, así como de los medios financieros. Los rumores de contradicciones en el seno del Gabinete: son algunas de las muestras de lo difícil que le está resultando al presidente Suárez y a su equipo económico hacer una política coherente con la crisis que se atraviesa. Las medidas aprobadas el pasado sábado han sabido a poco, tal vez porque las más significativas se conocían y también porque las más esperadas no han sido concretadas suficientemente.

Seguimos en cierta medida en el reino del rumor. Como siempre. Porque si el Gobierno ha insistido repetidamente que el Norte de su política económica es la lucha contra la inflación, la concreción de sus propuestas en materia de control de crecimiento de los salarios es el punto clave que el país quiere conocer. Y hasta el momento no lo sabe si no es por boca de los representantes de las centrales sindicales que se han entrevistado con el ministro de Trabajo.

Se habla, según estos representantes, de que los salarios sólo podrán aumentar linealmente en 50.000 pesetas anuales. El criterio de la fijación lineal de los aumentos salariales ha sido confirmado por la referencia oficial del Consejo de Ministros. Y el concepto podría ser aceptable por las centrales sindicales. El problema radica en la cuantía, y 50.000 pesetas parecen pocas.

Y no sólo serán pocas para la gran masa de trabajadores manuales, sino especialmente para esos millones de empleados españoles encuadrados en lo que se vienen a llamar los puestos de cuadros medios. Para quienes hoy ganan más de medio millón al año, la subida salarial propuesta no va a suponer sino un 10 por 100, que se irá reduciendo a medida que se suba en la escala de ingresos, de sus emolumentos anuales. Y eso es realmente poco. Sobre todo si se tiene en cuenta que esas clases sociales son las que van a soportar más directamente las consecuencias de la minirreforma fiscal que se propone realizar el Gobierno.

La derecha, preocupada

Con la derecha social preocupada por la pérdida de privilegios que pueden suponer las reformas que inevitablemente ha de adoptar el Gobierno en busca de la credibilidad y de la factibilidad de su

Política económica

ESTO NO ES ITALIA

CARLOS ELORDI

programa. Con las centrales sindicales a la expectativa, pero aduciendo ya su desacuerdo. Y con la posibilidad de que esa gran masa de maniobra tradicional de la derecha que son las clases medias alce también su voz crítica, el Gobierno no puede estar cómodo.

Para consuelo de todos se podría decir que estamos asistiendo a los primeros compases de una obra realmente compleja y compuesta por muchos tiempos. Sin embargo, estos primeros compases están sirviendo para medir la calidad y disponibilidad de los intérpretes y sobre todo del director, que es el Gobierno.

No cabe insistir más de lo que el Gabinete, siguiendo las ideas de Fuentes Quintana, pretende hacer en la economía española. Luchar contra la inflación y contra el aumento del déficit exterior son sus propósitos. Y, en su opinión, la única manera efectiva de hacer lo primero es controlando el crecimiento de los salarios, a los que se atribuye la mayor responsabilidad en la carrera inflacionista. Así, más o menos con estas palabras, con más o menos adornos, lo ha dicho el vicepresidente económico, y así rezan las dos declaraciones del Gobierno en la materia.

Es el "leitmotiv" que han venido repitiendo los exponentes de la derecha desde que España entró en la crisis económica. La izquierda nunca ha aceptado, ni aceptará, este planteamiento, tanto por razones de clientela política como por un distinto enfoque de la dinámica económica y por una preocupación mucho mayor por las injusticias de la estructura económica, que son directas causantes de tensiones inflacionistas: la inflación que generan los circuitos comerciales, los circuitos financieros, el descontrol del gasto público o la especulación —y no sólo la del suelo— son temas en los que insiste la izquierda y pide reformas estructurales de estas injusticias a la hora de hablar de controles a la inflación.

Aunque también acepten, y algunos dirigentes se han venido pronunciando sobre este tema en los últimos meses, que podría ser conveniente una moderación en el crecimiento de los salarios más altos, los programas de la izquierda y de las centrales sindicales piden atención a los déficits es-

tructurales, a las injusticias del sistema y hacia el paro, sobre todo hacia el paro. Conciben los programas de austeridad, como el que más o menos tímidamente trata de poner el pie el Gobierno, como una solución de emergencia que evite el deterioro de los intereses y beneficios del capital, de los capitalistas. Son conscientes, por lo menos algunos de ellos, de la gravedad de la situación, del peligro que la crisis supone para la democracia, por la que esos partidos y organizaciones sindicales, y especialmente ellos, han luchado tan duramente.

Y por eso están dispuestos a hacer concesiones, pero no lo están, o no deberían de estarlo, a entregarse abiertamente a los designios de la derecha, a enrolarse bajo la bandera del gran capital.

¿Es posible un acuerdo?

Fuentes Quintana y el Gobierno son, al parecer, conscientes de lo difícil que va a ser un acuerdo con la izquierda y con las centrales sindicales. Y por ello, siguiendo la óptica del superministro económico que ha hecho de la reforma fiscal una obsesión, se ha dispuesto a elaborar unas medidas en materia impositiva que aducen como "prueba" —así se dice en la última declaración del Gobierno— de su ánimo negociador.

Fuentes Quintana parece creer en la inevitabilidad de uno u otro tipo de pacto. Sigue con atención, según él mismo nos dejó caer en una entrevista que con él mantuvimos semanas antes de su nombramiento, la experiencia italiana. Y ha puesto, en busca de ese pacto, la carne de la reforma fiscal en el asador.

Pero si difícil está resultando llegar a un compromiso en Italia, y todo parece indicar que no se completará hasta que el mismo adquiera la forma de un Gobierno en el que estén presentes los comunistas, mucho más difícil va a serlo en España. Porque por muy acostumbrados que estemos a decir que las situaciones italianas y española son muy similares, lo cierto es que están mucho más distantes de lo que parece, en lo político y en lo económico.

Aquí, en un sistema montado sobre el fraude fiscal más fabuloso que existe en los países civilizados —y con abismal diferencia

sobre el que nos sigue en la aciaga lista— un anuncio de minirreforma fiscal provoca reacciones desmesuradas y abre la posibilidad de que el montaje político trabajosamente logrado se venga abajo. Y ha de tenerse en cuenta que sin ese anuncio —cuyas posibilidades de realización, no por falta de voluntad de sus instigadores, sino de limitaciones más objetivas, es por lo menos dudosa— el programa ni siquiera habría sido comentado por la izquierda: habría merecido el mismo rechazo global que los anteriores, y mucho más precarios, intentos de los pasados Gobiernos.

Decir que la derecha ha quitado el apoyo al Gobierno por sus anuncios en materia fiscal sería, no sólo exagerado, sino falso. Entre otras razones porque exponentes tan cualificados de la derecha económica como son los dirigentes bancarios militan en las filas del Gabinete. A lo sumo se podría decir que algunos sectores, los que apoyan a Alianza Popular —que muy modositamente ha dicho no a las medidas fiscales— se han preocupado seriamente de lo que está ocurriendo, que otros tratan de poner en orden sus cuentas de cara a las nuevas actuaciones del fisco y hasta que otros han buscado poner a buen recaudo sus dineros allende nuestras fronteras. Y habría que decir que para estos últimos la devaluación habrá sido una terrible noticia.

Pero la derecha económica se mantiene a la expectativa: ha dicho que sí a las medidas fiscales, siempre dentro de un orden, porque esperan que a cambio de ellas se consiga el control salarial. En definitiva, hay un apoyo expectante. La reacción de las clases medias, políticamente partidarias de opciones moderadas, es todavía una incógnita que puede aclararse a medida que prosigan las actuaciones fiscales y sea de uno u otro signo el control que se logre sobre el marasmo económico.

El control salarial

Se llega así a la paradoja de que el único apoyo potencial a fondo que podría tener el Gobierno sería el de la clientela tradicional de los partidos de izquierda y el de la clase obrera ligada a las centrales sindicales. Es un apoyo posible a un Gobierno que preten-

diera consolidar la democracia política, puesto que es este público el más genuinamente interesado en ella, y en profundizar la democracia económica por la que lucha desde hace tantísimas décadas.

La izquierda, sin embargo, podría apoyar, ser el sostén de un programa de gobierno para hacer frente a la crisis económica sólo si éste matizara su concepto del control salarial, si fijara otros tipos de controles, si atendiera a las reformas estructurales que antes mencionábamos y si, además, se sintiera protagonista directo de la gestión de la economía. Ahí sí que la situación es italiana. Sólo que con un ligero matiz: la supervivencia política de la democracia italiana no está, estrictamente, en juego, por lo menos a medio plazo. En España, a pesar de todo, sí. Y todos sabemos por qué. De ahí que la negociación hacia ese compromiso económico con la iz-

quierda sea mucho más complejo de lo que aparece.

De ahí que la izquierda tenga que moderar sus aspiraciones. Moderar, sí. Hacer desaparecer sus peticiones, no. ¿Y el Gobierno? Basado en un esquema preestablecido, en una serie comprensión del problema (la comprensión de Fuentes Quintana que se dejó traslucir en sus palabras en RTVE, pero que aparecía mucho más nítida en sus declaraciones a TRIUNFO, aunque por aquel entonces no era todavía superministro), el Gobierno está actuando demasiado por su cuenta. Ha devaluado sin paliativos, ha establecido un control estricto de precios para los dos próximos meses —medida congruente con la anterior, pero que dada la escasez de medios de la Administración para su control y la complejidad del mismo, puede, y seguramente va a ser, una fuente de tensiones y

problemas para tantas alicaidas empresas— y ha elevado, también sin paliativos, los precios de los combustibles.

Hechos consumados

No entremos en las razones de estas actuaciones. Siguen una lógica que ya ha sido suficientemente expuesta por exponentes de la Administración. Sólo que esa lógica, discutible de por sí, aboca, mediante una política de hechos consumados a plantearse el tema del control salarial como el único crucial para continuar esa política económica: el camino, con esas tres actuaciones, que hasta el momento son las únicas de que ha dado muestras el Gobierno, ya está trazado. A la izquierda, poco a poco, se le pretende aminconar en una disyuntiva en la que sólo le quedará aceptar o rechazar, decir sí o no, sin matizaciones. Y esos no son los presupuestos de una moderación que podía ser requerida atendiendo a las dificultades políticas generales. En pocos días, sin que todavía esté en marcha un plan de actuación completo, se ha estropeado excesivamente el terreno de juego.

Decíamos al principio que el programa del pasado sábado ha sabido a poco. Y así parece: la devaluación estaba ya realizada, el control de precios también y el aumento de los precios de los combustibles se había retrasado —aunque estuviera cantado—, tanto por razones de imagen (se lo postergó al domingo) como por ciertas dificultades internas al propio Gabinete relativas a la oportunidad o no de revisar todo el esquema de precios. Se podría decir, por tanto, que lo gordo estaba hecho y que la guinda (el control salarial) no estaba suficientemente madura.

¿Y lo demás? Las normas fiscales eran las anunciadas en la declaración programática e innegablemente son importantes y positivas. Su significación en el esquema general de actuación del Gobierno ha sido aclarada por él mismo y comentada en las líneas anteriores. En otro terreno, y en consonancia con las opiniones de Fuentes Quintana, la política monetaria no va a ser, "en la medida en que el programa de moderación de las rentas monetarias resulte efectivo", caballo de batalla del Gobierno. No se quiere "recorrir a procesos bruscos de contracción monetaria y crediticia". Sin embargo, y utilizando un mecanismo tradicional, pero cuyos efectos reales son discutibles, se eleva en un punto el tipo de interés básico del Banco de España, que queda fijado en un 8 por 100, dos puntos por encima de donde estaba al empezar la crisis.

Hay también una larga enumeración de medidas destinadas a

reestructurar los circuitos financieros. Liberación de los tipos de interés para operaciones a más de un año es una idea querida por Fuentes y debatida entre los banqueros: el hecho de que vaya a ser "inmediata", según reza la reseña oficial del Consejo y que aún no haya sido aprobada, podía indicar que aún se está en ese debate. La fijación del tipo de interés sobre las cédulas de inversión en un 6 por 100 es una medida de dudosa eficacia para obtener mayores fondos destinados al desarrollo regional y otros fines que es a los que normalmente se destinan estos ingresos. La elevación de los tipos de interés vigentes en los circuitos privilegiados de financiación es una norma demasiado genérica como para saber los efectos que tendrá, mientras no se concrete, en la desaparición gradual de esos circuitos, tal y como se pretendía en la declaración programática del Gobierno.

Poca atención al paro

Las medidas contra el paro son lo poco significativas, con un alto grado de inconcreción además, que cabía esperar de un programa netamente antiinflacionista. El incremento de los fondos destinados a los subsidios de desempleo no quiere decir nada mientras no se diga en cuánto y cómo va a aumentar el seguro. Los 20.000 millones de deuda pública, medida que figuraba en los programas de algún partido de izquierda, son pocos para los fines que se pretende cubrir. "Se activará el programa de construcción de viviendas sociales", es decir, poco, sin fijar fechas ni cantidades, sobre todo recordando los escasos efectos de medidas similares adoptados por Gobiernos anteriores. Más interesante, aun cuando las limitaciones derivadas de la coyuntura sean innegables si tenemos en cuenta que las empresas no invierten por razones muy distintas que la excesiva presión fiscal, es la medida según la cual habrá bonificaciones para aquellas entidades que creen nuevos puestos de trabajo: tal vez el anunciar una disminución controlada de las horas extraordinarias habría sido más efectiva, pero a la mayoría de las empresas no les habría satisfecho.

Y poco más. Por no repetir una vez más la falta de atención a temas como la agricultura, los circuitos comerciales, etcétera. La reforma fiscal sigue siendo el elemento descollante del programa económico del Gobierno: la política de rentas, el control de los salarios, su auténtico motor y significativo. Y ahora, con todas las preocupaciones que hemos expuesto, contemplemos preocupadamente la posibilidad de un acuerdo. ■ C. E.

